

PRELIMINARIO DEL CIUDADANO PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION.

El Procurador general de la Nacion dice: que en la causa instruida contra Serafia Gomez por circulacion de moneda falsa, el Juzgado de Distrito de Guanajuato falló en definitiva, dando por compurgada á la Gomez con dos meses que habia sufrido de prision: que el Tribunal de circuito de Querétaro confirmó en todas sus partes la sentencia del inferior, y que esta fué consentida por la reo y su defensor.

Por tal motivo, y no habiendo defectos de sustanciacion, el Procurador General pide se dé por revisada la causa.

México, Marzo 21 de 1871.—(Firmado.)
—L. Guzman.

*Auto de revision de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Marzo veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Por revisada, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—(Firmados.)—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Azua.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Marzo veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—Agustin Peralta, oficial mayor.

AMPAIRO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por D. Canuto Alvarez Tostado, contra el auto pronunciado por el Juez de lo Civil de la ciudad de Zacatecas que mandó adjudicar en parte de pago á los acreedores al concurso á bienes del quejoso, los bienes que se secuestraron, conforme á lo dispuesto en la ley de 31 de Enero de 1870.

PRELIMINARIO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

Al Juzgado de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que D. Canuto A. Tostado solicitaba por medio del ocurso de 20 del que rige, que la justicia de la Union lo ampare y proteja contra el auto del dia 16, pronunciado por el Juzgado de lo civil de esta ciudad, que mandó adjudicar en parte de pago á los acreedores al concurso á bienes del quejoso, por las dos terceras partes de su avalúo, los bienes que se le secuestraron conforme á lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de 31 de Enero de 1870; por su participio en la rebelion de 8 de dicho mes.

El Promotor hace notar desde luego, que no estando concebida la solicitud referida en los términos prescritos por el artículo 49 de la ley Orgánica de amparo, por no explicarse pormenorizadamente el hecho que motiva la queja, determinando la garantía individual que se juzga violada; y no teniendo el escrito en que se instaló este juicio el requisito prevenido por el artículo 36 de la ley de 4 de Mayo de 1857, en su concepto, debió desecharse de plano la solicitud presentada por Tostado, como impertinente, frívola é inepta; y tanto mas, cuanto que hay otra razon legal poderosísima que impide la admission del recurso intentado contra el auto del 16 del que fina, y es la disposicion terminante del artículo 89 de la

ley de 20 de Enero de 1869, sobre la que son tambien expresas las supremas resoluciones de 31 de Agosto y 18 de Setiembre del mismo año, relativas á que el recurso de amparo no es admisible en negocios judiciales, en que hay legítima contencion de causa entre el actor y el reo ante el juez competente.

Efectivamente; habiéndose establecido los juicios de amparo para conservar ileso la Constitucion general de la República y las garantías individuales que ella otorga, la mision de los tribunales federales no es mezclarse en la estimacion de la justicia ó injusticia con que se disputen y decidan derechos controvertidos, cuyo conocimiento corresponde á los tribunales ordinarios, con recursos de igual género para reparar los agravios que se irroguen, tales como la apelacion seguida ante el Supremo Tribunal, ó la responsabilidad exigida en forma al Juez que conoce en el negocio particular de que se trata. Si al contrario, el Juzgado de Distrito interviniera en declarar sobre el auto reclamado, podrian contradecirse dos sentencias, resultando de aquí un conflicto que redundaria en descrédito de las instituciones y de la administracion pública, y esa intervencion, hiriendo sin defensa los derechos de los acreedores de Tostado, á quienes sin audiencia y citacion se causarían perjuicios irreparables, no les dejaría ya ningun recurso legal á no ser tambien el de amparo contra la decision; cuyos inconvenientes desaparecen con los recursos ordinarios que las partes tienen expeditos en los negocios judiciales.

Por otra parte; la relacion fundada y verdadera de los hechos que hace el ciudadano Juez de lo civil en su informe sobre lo principal de la queja de Tostado, demuestra que no hay violacion de las garantías individuales, y pone de manifiesto la impericia y ligereza con que se concibió el recurso.

Pronunciada en rebeldía y ejecutoriada la sentencia de 6 de Junio de 1870 que, por la responsabilidad contraída por D. Ca-

nuto A. Tostado por su participio en la rebellion de 8 de Enero, declaró que los bienes que se le habian asegurado quedaban afectos de mancomun ó insólidum al pago de las cantidades ocupadas á la Federacion, los acreedores particulares del quejoso iniciaron y formalizaron el concurso á sus bienes, válidamente ante el Juzgado de Distrito, y conforme á los artículos 59 y 89 de la ley de 31 de Enero de 1870, reclamando derechos preferentes adquiridos con anterioridad sobre los bienes del quejoso, en virtud de contratos y transacciones regidos únicamente por las reglas del derecho comun, y celebradas ante el concurso las diferentes juntas prevenidas; nombrado síndico; legitimados y probados los créditos, y desechados otros, se hizo la graduacion correspondiente, y por sentencia en forma se mandaron adjudicar los bienes secuestrados, para pago de los acreedores que legitimaron y probaron sus créditos.

En este estado los autos, y cuando los acreedores de Tostado habian adquirido sobre sus bienes los derechos que los declaró la sentencia de graduacion, se recibió la ley de amnistia de 14 de Octubre, cuyo artículo 89 dice: "los bienes secuestrados se devolverán inmediatamente á los interesados, en el estado en que se hallen, siempre que no estén enajenados," y los del quejoso, por una sentencia que causó ejecutoria, estaban consignados ya al pago de sus acreedores; por lo que el Juzgado, considerando que no podía decretar el sobreseimiento conforme al artículo 59 de la ley de amnistia, sino con perjuicio de terceros, y no teniendo ya interes el erario de la Federacion sobre los bienes concursados, mandó pasar los autos al Juzgado de lo civil con todos sus incidentes, para que ante aquella autoridad continuaran los acreedores ejercitando sus derechos, como indudablemente lo han hecho, supuesto lo que se dispone en el auto reclamado.

Todo esto expuesto; ninguna conexcion tiene la obligacion de Tostado de pagar sus créditos, siendo requerido en juicio confor-

me á las leyes comunes, con la revolucion de 8 de Enero y los artículos 17 y 22 de la Constitucion federal; ni dichos créditos son el fondo de aquella, ni materia de la ley de amnistía. Siendo ya únicamente un negocio civil, que solo pueden seguir las partes por su instancia ante los tribunales ordinarios, no viola las garantías del quejoso el auto reclamado, y contra los agravios que le cause, expeditos están los recursos comunes de alzada y responsabilidad que lo conceden las leyes; pero la justicia federal no puede, sin violar la misma Constitucion, declarar sobre el número de créditos y acreedores que tiene el quejoso que, con justicia que no puede controvertirse ante el Juzgado, y fundados en la ley, piden el pago de lo que se les debe, compeliendo civilmente al deudor, sin ninguna relacion con la ley de 31 de Enero y el pronunciamiento del ex-diputado Tostado:

Resumiendo, pues, todo lo espuesto, creo el que suscribo haber demostrado:

1º Que la solicitud de amparo de D. Canuto A. Tostado, no está concebida en los términos que prescribe el artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, ni hecha con el que señala el artículo 36 de la de 4 de Mayo de 1857.

2º Que no procede el amparo solicitado contra el auto de 16 del que fina, del Juzgado de lo civil de esta ciudad, porque el recurso está terminantemente prohibido en negocios judiciales, en que la decision de la causa controvertida está sometida únicamente á los tribunales ordinarios, con recursos de la misma naturaleza, para pedir la reparacion de los agravios que se causen; y

3º Por último; que examinados ademas atenta y detenidamente el procedimiento que origina la queja y los artículos constitucionales citados en ella, sin determinar expresamente cuál de las garantías que otorgan viola el auto reclamado, no se encuentra violacion ninguna, porque dicho auto es una providencia judicial de autoridad competente, que funda y motiva el proce-

dimiento, sin que sea del caso declarar si tales fundamentos son buenos ó malos, por ser de la competencia del superior respectivo del Juzgado de lo civil.

En tal virtud, el Promotor Fiscal, llamando la atencion del Juzgado sobre los términos irrespetuosos con que se produce el quejoso respecto de las leyes federales, para que se le advierta y estrañe por ellos, y se subrayen en el recurso que los contiene, concluye pidiendo al juzgado, se sirva declarar: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Canuto A. Tostado, contra el auto de 16 del corriente, por no determinar el quejoso la garantía que juzga violada; estar prohibido el recurso en negocios judiciales, y no violar el auto reclamado ninguno de los derechos garantizados por la Constitucion general de la República; y condenar á Tostado al pago de la multa que para estos casos señala el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Así lo entiendo de justicia, protestando lo necesario; mas no obstante, el ilustrado criterio del juzgado resolverá lo que estime conveniente.

Zacatecas, veintiocho de Febrero de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Zacatecas, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el ciudadano Canuto Alvarez Tostado, viudo, mayor de edad, y de esta vecindad, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías otorgadas en los artículos 17 y 22 de la Constitucion federal, por el hecho de haber continuado el ciudadano Juez de lo civil de esta Capital los procedimientos del concurso que se formó en este juzgado conforme á lo dispuesto en el artículo 5º de la ley de 31 de Enero del año próximo pasado, despues de publicada la de am-

nistía de 14 de Octubre; visto el informe rendido por aquella autoridad, como la responsable en el caso; el pedimento del ciudadano Promotor Fiscal, de 28 de Febrero último, en que se juzga improcedente el recurso por las razones que en él aduce; las pruebas producidas por él mismo, el auto en que se dispuso que el expediente quedara de manifiesto en la secretaría para que las partes informasen de su derecho, el alegato del actor, la citación para sentencia; con lo demás que se tuvo presente y verconvino.

Considerando: 1º, Que por los términos en que está concebido el recurso, se viene en conocimiento de que se ha interpuesto el amparo en un negocio judicial, contra lo expresamente determinado en el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869; y que si bien es cierto que por tal motivo pudo haberse desechado de plano el referido recurso, tratándose de los procedimientos del propio juzgado, ha debido procederse con la mesura y justificación correspondientes, oyendo al Ministerio público y á la autoridad responsable, en la forma que señala la ley.

2º Que aunque en el escrito de demanda no se especifica la garantía violada, por los términos de su relato se comprende, que las que se han creído vulneradas son las que el Código fundamental de la Nación consigna en los citados artículos 17 y 22.

3º Que no ha existido la violación de la garantía que protege el artículo 17, porque si bien es cierto que en la ley de amnistía se mandó sobreseer en todos los juicios instruidos por delitos políticos, esta dejó á salvo los derechos de tercero legítimamente adquiridos.

4º Que por los autos de 6 de Junio, 2 de Julio y 19 de Agosto del año próximo pasado, la casa y muebles del referido señor Tostado, quedaron consignados á sus acreedores en pago de sus respectivos créditos.

5º Que la cosa juzgada es la verdad.

6º Que no hay anticonstitucionalidad en

la resolución de 31 de Enero, porque según manifestó el Ejecutivo al Congreso de la Unión en Abril del año anterior, al dar cuenta del uso que había hecho de las facultades con que fué investido, dicha resolución no es una ley, sino un reglamento que se dictó para hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria en que incurrieron los sublevados, conforme á lo dispuesto en las leyes de 22 de Febrero de 1882, 3 de Noviembre de 1858 y 6 de Diciembre de 1856, vigentes, y anteriores á los hechos de donde dimanó la responsabilidad; y en los reglamentos no pueden contenerse prescripciones opuestas á la ley cuya ejecución se trata de facilitar.

7º Que tampoco se ha violado la garantía consignada en el artículo 22, porque ni este Juzgado ni el de lo civil han ordenado la confiscación de los bienes del quejoso, y en derecho aquella importa una cosa bien distinta del secuestro.

8º Que todo ciudadano está obligado á respetar las leyes, y á las autoridades, y á ese respecto ha facultado al ciudadano Tostado, usando en sus escritos de expresiones insultantes. Por todas estas consideraciones, principios legales de que se ha hecho mérito, y con fundamento de lo dispuesto en los artículos 9 y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, el Juzgado falla este juicio con arreglo á las siguientes proposiciones.

1ª Se declara que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al ciudadano Canuto Alvarez Tostado contra la providencia del Juzgado de lo civil de esta ciudad de 16 del próximo pasado Febrero, por no haberse efectuado violación de las garantías individuales consignadas en los artículos 17 y 22 de la Constitución general de la República.

2ª Suárayense las palabras insultantes que aparecen en la protesta y escritos de fojas 1, 3, 4, 55, 56 y 57 de este expediente, para que sean tachadas, si se confirmase en esta parte el fallo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3ª Se impone á la parte actora una multa de cien pesos, que enterará en la Gefatura de Hacienda del Estado, confirmado que sea este auto por el Superior; apercibiéndosele muy sériamente por la manera irrespetuosa con que califica las leyes y los actos de los funcionarios públicos.

4ª Publíquese esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y copia de la misma sentencia al Semanario Judicial de la Federacion para los efectos legales. Lo decretó y firmó el ciudadano Lic. Ignacio R. é Ibarrola, Juez 2º suplente de Distrito del Estado.—Doy fé.—Firmado.—*Ignacio R. é Ibarrola.*—*Luis G. Chavez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el ciudadano Canuto A. Tostado, contra las determinaciones del Juzgado de lo civil de esa capital, en virtud de las cuales han continuado los procedimientos del concurso que se formó al quejoso en el juzgado ante el cual se entabla el presente juicio, conforme á lo dispuesto en el artículo 3º de la ley de 31 de Enero del año próximo pasado, fundándose el peticionario en que publicada la ley de amnistía de 14 de Octubre del año anterior, los referidos procedimientos importan una violacion de las garantías que otorgan los artículos 17 y 22 del pacto fundamental de la República. Considerando: que el Juzgado de Distrito de Zacatecas, al remitir al de lo civil de esta ciudad los autos del concurso necesario á bienes del ciudadano Canuto A. Tostado, despues del sobreseimiento en la causa formada al quejoso, por su participio en el movimiento revolucionario de 8 de Enero

de 1870, ha obrado conforme á derecho; porque la ley de amnistía de 14 de Octubre del año anterior, al ordenar el sobreseimiento, se refirió á la condonacion de las penas y cantidades que por vía de indemnizacion debia de percibir la Hacienda pública, dejando expresamente á salvo los derechos de los particulares. Considerando: que los procedimientos seguidos en la secuela del juicio del concurso, por ser independiente de la causa que motivó el secuestro de los bienes del quejoso, no podian afectarse en manera alguna por la citada ley del 14 de Octubre, y el peticionario está en aptitud de hacer valer los derechos que las leyes marcan en los juicios como el que se sigue ante el juzgado de lo civil de Zacatecas, y usar de los recursos legales que le convengan. Considerando, finalmente: que el juzgado de lo civil de Zacatecas, al continuar los procedimientos, segun el estado que guardaban los autos del concurso á bienes de D. Canuto A. Tostado, no ha infringido las garantías que otorgan los artículos 17 y 22 de la Carta federal de la República, con los fundamentos expuestos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Zacatecas, que en su parte resolutive manda: “1º, que la justicia de la Union no ampara ni protege al ciudadano Canuto Alvarez Tostado, contra la providencia del juzgado de lo civil de esa ciudad, de 16 del próximo pasado Febrero, por no haberse efectuado violacion de las garantías individuales, consignadas en los artículos 17 y 22 de la Constitucion federal.” “2º, Que se subrayen las palabras insultantes que aparecen en la protesta y escritos de fojas 1, 3, 4, 55, 56 y 57 de este espediente, para que sean tachadas, si se confirmase en esta parte el fallo por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.” “3º, Que se impone á la parte actora una multa de cien pesos que enterará en la Gefatura de hacienda del Estado, confirmado que sea este auto por la Superioridad, apercibiéndosele muy sériamente por la manera

irrespetuosa con que califica las leyes y los actos de los funcionarios públicos.

Así por mayoría de votos, respecto de los puntos primero y tercero, y por unanimidad respecto del segundo, lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—Firmados.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

RECURSO DE NULIDAD

Interpuesto ante el Tribunal de Circuito de México, por el ciudadano fiscal 2º Lic. Antonio Aguado, de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de esta capital, en los autos promovidos por D. Cayetano Rubio, sobre que no se le cobre ejecutivamente por la Tesorería General la cantidad de \$19,270 que se asegura debe á la Hacienda pública, según la denuncia de D. José María Castro.

EXPEDIENTE DEL CIUDADANO FISCAL.

El Fiscal dice: que del expediente que se tiene á la vista, consta: que en 25 de Julio de 1868, el ciudadano José M. Castro, se presentó al Supremo Gobierno por conducto del Ministerio de Hacienda, denunciándole la existencia de un capital oculto, que se adeudaba al Erario Nacional, y pretendiendo como recompensa la parte que la ley señala en semejante caso, ó la que equitativamente acordare el Ejecutivo.

El acuerdo que recayó á esta pretension, fué que el denunciante precisara su denuncia, y que una vez calificada de tal, se le daria la tercera parte de lo que percibiese el Erario.

En cumplimiento de esa disposicion, Castro presentó un segundo escrito, que obra á fojas 20 del cuaderno principal, en el que manifiesta claramente, que D. Cayetano Rubio es responsable al Erario Nacional de la cantidad de diez mil trescientos setenta y cinco pesos, como fiador que fué del contratista José Gutierrez, el cual, habiéndose comprometido á entregar al Gobierno un vestuario militar compuesto de dos mil piezas de ropa, y cuya entrega garantizó Rubio, Gutierrez no llegó á cumplir por su parte con el contrato, mientras que el Gobierno, por la suya, le dió la suma referida. El denunciante acompaña en copia dos documentos; el uno en que constan los términos del contrato, ó hablando con mas exactitud, la constancia en que se reconoce Gutierrez deudor al batallón Activo de Matamoras, de las prendas que allí mismo se mencionan; el otro, es el comprobante del pago hecho á Gutierrez en 26 de Junio de 1868, bajo la póliza correspondiente. El denunciante ofrece en este escrito presentar los originales, y se refiere tambien á los datos que deben existir en los libros de la Tesorería general de aquella época, y en los de la comisaría de Ejército y Marina.

Este escrito se mandó pasar á informe de la Tesorería general, el cual lo evacuó en los términos expresados en la comunicacion de fojas 19 del cuaderno citado. Por ellos aparece comprobado el contrato celebrado por Gutierrez, el pago que le hizo la extinguida Comisaría Central de Guerra y Marina, bajo la póliza número 4236, la existencia original del recibo de la entrega del vestuario al batallón de Matamoras, con las firmas correspondientes; además, añade la Tesorería, que como Castro acompaña á su solicitud un contrarecibo con la responsabilidad de D. Cayetano Rubio, dicha oficina entiende, que para ajacular el pronto